

8. La democracia entre las armas: la percepción de los legisladores colombianos (1998-2018)

Paola Montilla

Tatiana Gélvez

DOI: <https://doi.org/10.17230/9789587208092ch8>

Resumen

En Colombia, un amplio número de trabajos demostró que la presencia de actores armados restringió la participación, alteró el orden institucional y mitigó la consolidación democrática a nivel local. Desde la cultura política, algunos estudios señalaron cómo las experiencias de los ciudadanos, relacionadas con el crimen, la inseguridad, la corrupción y el conflicto afectan el apoyo a la democracia y las expectativas de los individuos respecto a la implementación del Acuerdo de Paz. Sin embargo, se ha avanzado poco para determinar cuál es el apoyo de las élites políticas al sistema político y a las instituciones, y en general son escasos los estudios que se preguntan cuál es la percepción de los legisladores sobre la corrupción, el conflicto y el rol de los partidos, entre otros temas. El objetivo de este capítulo es analizar si existe una relación entre la percepción de los legisladores sobre los imperativos democráticos y el incremento de la violencia en Colombia. Para ello se revisan las percepciones reveladas por los parlamentarios, entre 1998 y el 2018, de los datos disponibles en el marco del Proyecto de Élite Parlamentarias de América Latina de la Universidad de Salamanca sobre la preferencia por la democracia, la estabilidad, la satisfacción y la confianza en las instituciones; y los datos del panel de conflicto y violencia del Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) que recopilan variables relacionadas con las diferentes ofensivas ejecutadas por los grupos al margen de la ley en Colombia (CEDE, 2018).

Introducción

Colombia tiene una de las democracias de América Latina que no han sufrido quiebres autoritarios, y por ello, ha sido considerada como uno de los regímenes más estables. Sin embargo, durante más de cincuenta años el sistema político franqueó una violenta confrontación armada; en estas circunstancias, la satisfacción con la democracia pudo verse afectada. El apoyo a la democracia entendido como “la forma en que una persona se orienta de manera evaluativa hacia algún objeto a través de sus actitudes o su comportamiento” (Easton, 1975) cambia en función de sus propias experiencias (Ceobanu, Wood y Ribeiro, 2010).

La prolongación del conflicto armado implicó que las hostilidades experimentaran distintas intensidades. En algunos territorios se libró una confrontación aguda, marcada por el surgimiento de diversos actores armados que, dependiendo de sus motivaciones, penetraron los departamentos y establecieron cada uno sus lógicas de poder. A finales de la década de los noventa, la expansión de la guerrilla¹ y los grupos paramilitares² por gran parte del territorio nacional recrudeció los enfrentamientos y llevó a una bipolarización del conflicto (Lair, 2000). No obstante, la lucha armada permaneció en las zonas rurales, los grupos insurgentes buscaron rodear los centros políticos y económicos más importantes del país y dejaron por fuera de la confrontación a la capital y a las principales ciudades (Bottia, 2003).

Luego de la ruptura del proceso paz con el Gobierno de Andrés Pastrana y la ofensiva militar dirigida por el Gobierno de Álvaro Uribe, las guerrillas, paulatinamente, fueron perdiendo control territorial. En el 2008, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) registraron el nivel más bajo de actividad desde 1990, y

¹ Las FARC-EP se organizaron en siete bloques: Oriental, Sur, Noroccidental, Central, Caribe, Occidental y Magdalena Medio.

² Los paramilitares se originaron a mediados de la década de los ochenta como reacción a las acciones guerrilleras, y se agruparon bajo la bandera de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en cuarenta bloques con seis estructuras principales: Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, Bloque Central Bolívar, Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, Alianza Oriente, Estructuras Independientes y Anillos de Seguridad.

para el 2011 habían dado de baja al 50% de su pie de fuerza (Echandía, 2012). El desplome de las estructuras armadas cambió las tácticas de confrontación. Los ataques de la guerrilla se hicieron más esporádicos y a través de grupos más pequeños, lo que obligó a los insurgentes a replegarse a sus zonas históricas, a áreas selváticas y a la periferia del país (Pizarro, 2006; Echandía, 2012).

En estos espacios de confrontación armada, algunos de ellos marcados por intersticios de álgida confrontación, los ciudadanos y los representantes políticos han formado su percepción sobre el devenir democrático, el desempeño del Gobierno y las instituciones políticas. En las zonas más afectadas por el conflicto es posible que los individuos expresen una mayor insatisfacción por la democracia, por las instituciones y los funcionarios públicos porque el Estado no ha proporcionado seguridad, ni ha mantenido el orden público (García, Rodríguez, Seligson y Zechmeister, 2015).

Los estudios sobre el apoyo a la democracia han estado asociados, por un lado, a la efectividad de las instituciones y a la representación de los intereses de la población (John y Sjoberg, 2020; Welling, Klemmensen y Serritzlew, 2020; Mishra y Abdullahi, 2020; Pellegata y Memoli, 2018; Singh, 2014; Norris, 2011; Inglehart, 2001). A variables económicas, el aumento de la clase media y el nivel de ingresos (Nadeau, Daoust y Arel-Bundock, 2020; Krieckhaus, Son, Bellinger y Wells, 2013; Przeworski, Álvarez, Cheibub y Limongi, 2000; Evans y Whitefield, 1995). Y, por otro lado, a factores individuales relacionados con la percepción de inseguridad, la confianza interpersonal y la sensación de bienestar subjetiva (Esaiasson, Dahlberg y Kokkonen, 2020), entre otros. En los últimos años, algunos trabajos han estudiado, para el caso de países con escenarios de conflicto, cómo la victimización y la percepción de violencia e inseguridad pueden influir en el descontento democrático (Seligson y Azpuru, 2001; House, 2014; Jochem, Murtazashvili y Brick, 2018).

En Colombia un amplio número de trabajos se han interrogado sobre cómo la violencia afectó las prácticas políticas y electorales (Pinto, 2017; Piñeros, 2017; Behar y Beltrán, 2020; Gallego, 2020). Ellos demostraron que la presencia de actores armados restringió la participación, alteró el orden institucional y mitigó la consolidación democrática a nivel local (Bejarano y Pizarro, 2002; García, 2007; Camacho, Duncan, Steiner, Vargas y Wills, 2009). Desde una nueva perspectiva, más asociada a la

cultura política, algunos estudios señalaron cómo las experiencias de los ciudadanos, relacionadas con el crimen, la inseguridad, la corrupción y el conflicto, afectan el apoyo a la democracia (García *et al.*, 2015) y cuáles son las expectativas de los individuos respecto a la implementación del Acuerdo de Paz (Gaviria, Ávila y García, 2019). En un ejercicio comparado distintos autores han incluido al país como uno de los casos de estudio, para argumentar que la victimización y la percepción de seguridad implican un cambio en la satisfacción con el desempeño de la democracia (Salinas y Booth, 2011; Blanco y Cruz, 2013; Corbacho, Philipp y Ruiz-Vega, 2015). Sin embargo, se ha avanzado poco para determinar cuál es el apoyo de las élites políticas al sistema político, a las instituciones, y en general son escasos los estudios que abordan cuál es la percepción de los legisladores sobre la corrupción, el conflicto y el rol de los partidos, entre otros temas.

El objetivo de este capítulo es analizar si existe una relación entre la percepción de los legisladores sobre los imperativos democráticos y el incremento de la violencia en Colombia. Suponemos que los representantes elegidos en zonas de alto conflicto –elevado número de ataques a la población civil– pueden disminuir su satisfacción con la democracia, o por el contrario, que al ser actores políticos expresen, independiente de la magnitud de los enfrentamientos, una complacencia con el desempeño de la democracia.

Para demostrar esta hipótesis revisamos las percepciones reveladas por los parlamentarios, entre 1998 y el 2018, en la encuesta de élites parlamentarias del Observatorio de Élites Parlamentarias en América Latina (PELA) sobre la preferencia por la democracia, la estabilidad, la satisfacción y confianza en las instituciones; y los datos del panel de conflicto y violencia del CEDE que recopilan variables relacionadas con las diferentes ofensivas ejecutadas por los grupos al margen de la ley en Colombia (CEDE, 2018). El documento se divide en tres partes; en la primera de ellas se hace una breve revisión de la literatura, luego se describen las tendencias de las actitudes frente a la democracia capturadas por la encuesta del PELA para periodos legislativos desde 1998 hasta el 2018 para legisladores elegidos en Colombia, y los datos del panel de conflicto y violencia del CEDE, específicamente sobre ataques a la población civil y desplazamiento a nivel nacional y departamental. En la tercera parte se presentan los resultados de las estimaciones de la relación entre percepciones revela-

das hacia la democracia, representadas en un índice de confianza en las instituciones, y la intensidad del conflicto armado, representada por el número de ataques a la población civil y de desplazados en Colombia. Por último, se presentan algunas conclusiones y reflexiones finales.

Factores de respaldo a la democracia: Revisión de la literatura

Luego de los procesos de democratización en la región, diversos autores enfocaron sus estudios sobre la consolidación de la democracia (Przeworski, Álvarez, Cheibub y Limong, 1996; O'Donnell, 1996; Schedler, 2001). En este marco, el apoyo de los ciudadanos al régimen es uno de los factores que se evalúa. El respaldo individual al sistema se entiende como una condición para el robustecimiento democrático (Inglehart, 2001; Norris, 2011).

Un gran número de trabajos han estudiado cómo distintos factores, económicos, políticos e individuales influyen en la satisfacción con la democracia (SWD) o en la preferencia por este sistema político (PFD) (Lagos, 2007; Van Spanje y de Vreese, 2014; Nadeau *et al.*, 2020). Sin embargo, la interpretación que se le ha dado a la satisfacción con la democracia ha sido heterogénea. Para algunos autores, el concepto hace referencia al apoyo a las autoridades; otros lo relacionan con el respaldo a las instituciones políticas y a la estructura constitucional. Otro grupo lo interpreta como un consentimiento generalizado a las instituciones y a los líderes políticos (Ceobanu *et al.*, 2010). En cualquiera de los tres sentidos, la satisfacción por la democracia se asocia al funcionamiento de las instituciones políticas y al comportamiento de los políticos, y supone que el sistema político actúa en consonancia con las demandas de los ciudadanos.

La preferencia por la democracia denota un consentimiento al significado ontológico de la democracia e implica una aceptación a una forma de gobierno. Además, la preferencia por este sistema representa la disposición de los individuos a actuar y mantener una cultura cívica (Inglehart, 2001). De esta manera, cuando las encuestas de opinión pública preguntan si “la democracia es preferible a cualquier otro tipo de

gobierno”, los individuos consideran la conveniencia de la democracia en abstracto. En cambio, cuando se responde sobre si “está usted muy satisfecho con el funcionamiento de la democracia”, los encuestados juzgan un aspecto concreto del sistema. La satisfacción con la democracia es más volátil y subordinada a coyunturas económicas y experiencias individuales; mientras que la preferencia por la democracia es más consistente en el tiempo, pues es indiferente a las fluctuaciones políticas y económicas. Los ciudadanos pueden manifestar su descontento con el desempeño del sistema y seguir comprometidos con la democracia (Salinas y Booth, 2011).

Dentro de la literatura que ha abordado el apoyo a la democracia, es posible distinguir tres grupos o generaciones de trabajos. El primero de ellos se ha centrado en la díada democracia y crecimiento económico (Colagrossi, *et al.*, 2020). Los autores enfatizaron en cómo el aumento de la clase media y mejores estándares de vida afianzaban la confianza en las instituciones (Barro, 1999; Przeworski, *et al.*, 2000; Inglehart y Welzel, 2005). Otros han sustentado que niveles más altos de desigualdad económica reducen el apoyo a la democracia, pero en los sectores más vulnerables el descenso es menor, porque creen que la consolidación democrática podrá aumentar la redistribución en el futuro (Krieckhaus, *et al.*, 2013). Los análisis más recientes argumentan que el margen de ingresos de las personas modera la percepción económica y ejerce un efecto directo en la satisfacción con la democracia. Las personas con más recursos tienen un alto nivel de bienestar material, son menos vulnerables frente a las recesiones económicas y al no depender de las políticas redistributivas expresan una mayor complacencia con el funcionamiento democrático (Nadeau *et al.*, 2020).

En el segundo grupo de trabajos se ha analizado cómo las instituciones políticas y su efectividad generan distintos niveles de confianza en la democracia. Un trabajo reciente corroboró que la actitud hacia la democracia se ve afectada por los resultados electorales, en especial cuando existen una división étnica y una polarización política extrema (John y Sjoberg, 2020). En Kenia, las campañas que buscan promover un comportamiento democrático –votar, rendición de cuentas, etc.– tienen un impacto positivo en individuos que han experimentado la victoria electoral, pero no en los que fracasaron en las elecciones. La insatisfacción con la democracia que manifiestan las personas que votaron por el partido que perdió

también expresa que hay menos confianza en las instituciones políticas. Este sentimiento se experimenta unas semanas después de los comicios y se mantiene por un periodo más largo de tiempo (Welling, *et al.*, 2020). Y dentro del grupo de los ganadores, los individuos que votaron por el partido que era su primera preferencia –ganadores óptimos– experimentan niveles más altos de satisfacción que quienes votaron por el mismo partido sin que este fuera su primera opción (Singh, 2014).

La satisfacción con la democracia no solo está asociada a factores culturales o partidistas, también depende de las reglas electorales. En sistemas mayoritarios, las personas que votaron por el partido que perdió las elecciones exponen una menor satisfacción democrática, ya que sus agendas políticas pueden verse más limitadas (Anderson y Guillory, 1997). En esta línea, un trabajo sobre Afganistán mostró que los ciudadanos que se sienten menos seguros mejoran su percepción sobre la democracia cuando las reglas electorales permiten expresar todo tipo de preferencias, incluso la de los grupos vinculados a la violencia (Jochem, *et al.*, 2018).

Indiscutiblemente, uno de los factores que determina la confianza en las instituciones y la satisfacción por la democracia es la corrupción. Esta reduce la capacidad administrativa del Estado, obstruye la prestación de servicios públicos y, por ende, debilita la confianza y la satisfacción con las instituciones (Anderson y Tverdova, 2003; Pellegata y Memoli, 2018; Habibov y Auchynnikava, 2019). Mishra y Abdullahi (2020) concluyeron que, en Somalia, la corrupción tiene un efecto negativo en la satisfacción de los ciudadanos, pero que una mayor participación de la sociedad civil genera mayor confianza en la democracia, de manera que se logra reducir el efecto negativo de la corrupción.

La última generación de trabajos ha relacionado el respaldo a la democracia con factores psicológicos y emocionales. Inglehart (2001) fue uno de los primeros autores en sustentar que la satisfacción con la vida y la confianza interpersonal tienen un efecto causal sobre el apoyo al sistema político. Corroborando este supuesto, otros estudios han subrayado que la confianza social y la confianza en las instituciones son variables que se refuerzan mutuamente y sustentan gobiernos democráticos más sólidos (Zmerli y Newton 2008; Salinas y Booth, 2011; Newton, Stolle y Zmerli, 2018). Y que cuando los ciudadanos mantienen una alta sensación de bienestar, expresan una mayor satisfacción con la forma en que funciona

la democracia; cuando no es así, los ciudadanos castigan a las autoridades gubernamentales y disminuyen su apoyo al sistema (Esaiasson, Dahlberg y Kokkonen, 2020).

Las actitudes de las personas frente a la democracia también varían en función de los niveles de seguridad pública y crimen. Un amplio número de trabajos, especialmente para África y América Latina, han analizado cómo ser víctima de un delito y la percepción de inseguridad menoscaban el apoyo a las instituciones y la satisfacción con la democracia (Fernández y Kuenzi, 2009; Ceobanu, *et al.*, 2010; Salinas y Booth, 2011). Haber sufrido un hecho violento implica menores niveles de solidaridad con las personas y genera una mayor desconfianza en las instituciones, en especial en el sistema judicial y la policía local (Blanco y Ruiz, 2013; Corbacho, Philipp y Ruiz-Vega, 2015).

En otros casos, la victimización puede propiciar una reacción emocional que genera un descontento frente a la democracia y una preferencia por políticas de “mano dura” y por un gobierno autoritario (Bateson, 2012; Hernández, 2017). En el informe del Latin American Public Opinion Project (LAPOP), Colombia 2014, los autores revisaron si haber sido víctima de un delito y la percepción de inseguridad, entre otras variables, determinaban un cambio en la satisfacción con el desempeño de la democracia. Las conclusiones arrojaron que la inseguridad tuvo un impacto negativo, mientras que haber sido víctima de algún acto de delincuencia y el conflicto armado no tenían relación con la percepción de la democracia (García, *et al.*, 2015).

El respaldo a la democracia en Colombia 1998-2018

Los trabajos sobre la satisfacción con la democracia en Colombia han utilizado principalmente información estadística basada en encuestas de opinión regionales, tales como Latinobarómetro, las cuales aportan una radiografía de las percepciones de los ciudadanos sobre la democracia y las instituciones (Salinas y Booth, 2011; Blanco y Cruz, 2013; Corbacho *et al.*, 2015). Este trabajo, en cambio, retoma la encuesta PELA, que señala las impresiones que tienen los legisladores en el momento de ingresar al Congreso.

La encuesta de élites parlamentarias ha logrado capturar por más de una década diferentes aspectos relacionados con la democracia, el régimen político, la relación con las instituciones, los partidos políticos y las coaliciones, las funciones del Estado, la intervención en la economía y cuestiones de interés nacional, así como la trayectoria personal y profesional de la actividad política y legislativa de los parlamentarios. El total de la muestra de la encuesta son 532 observaciones³ distribuidas a lo largo de seis periodos legislativos, como se detalla en la tabla 8.1.

Tabla 8.1 Resumen de las encuestas del PELA Colombia

Periodo	Muestra
1998-2002	88
2002-2006	95
2006-2010	107
2010-2014	91
2014-2018	84
2018-2022	67
Total	532

Fuente: Elaboración propia con base en datos del PELA.

Para definir la variable dependiente –satisfacción con la democracia– se utilizan cuatro preguntas que revelan la posición de los representantes a la Cámara. La primera de ellas se refiere a la “preferencia de la democracia como forma de gobierno”; la segunda examina la estabilidad de la democracia, es una pregunta que a diferencia del cuestionamiento anterior alude al desenvolvimiento del sistema político en su conjunto; el tercer interrogante, presente en los cuestionarios del 2010, el 2014 y el 2018, cita, claramente, el nivel de satisfacción con el funcionamiento

³ La muestra se restringió a las observaciones de interés para el análisis direccionado a las percepciones de los representantes asociados a diferentes departamentos del país. Por tanto, se excluyeron las respuestas de los representantes de circunscripciones especiales: negritudes, indígenas, residentes en el exterior y minorías políticas, y los senadores encuestados para el periodo legislativo 2018-2022.

de la democracia. La cuarta cuestiona la confianza que tienen los representantes en distintas personas, grupos o instituciones. Utilizando las repuestas a esta última pregunta, se construyó un índice que mide el nivel de confianza en las instituciones, como una variable que sirve para estimar la satisfacción con la democracia desde 1998 hasta el 2018 (Salinas y Booth, 2011; Esaiasson, *et al.*, 2020; Welling *et al.*, 2020).

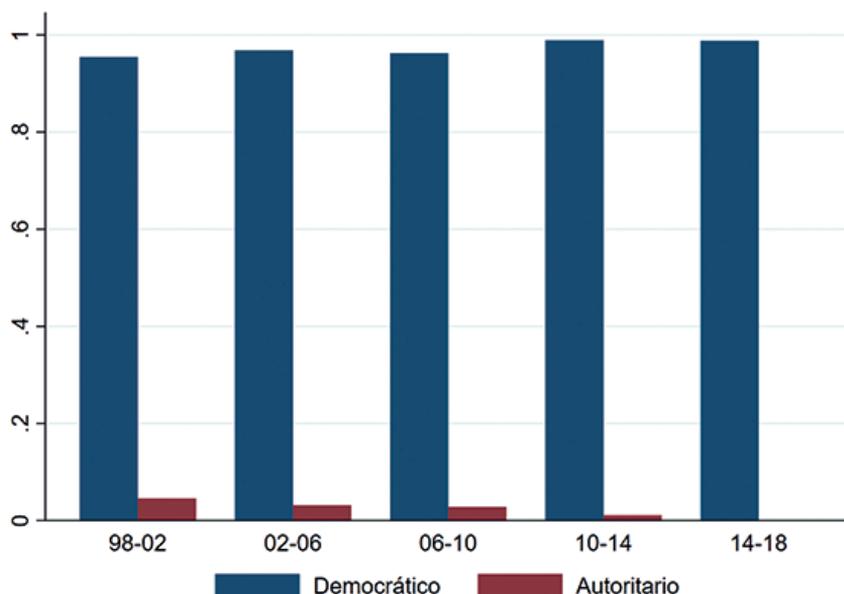
El permanente respaldo a la democracia

A finales de la década de los ochenta el país sucumbió en un agudo escenario de violencia. Atentados terroristas, secuestros selectivos, ataques a poblaciones civiles y el asesinato de líderes políticos fue la antesala de uno de los procesos de democratización más profundos de la historia de Colombia, la Constituyente de 1991. Desde esta época, e incluso desde años anteriores, la democracia colombiana, una de las más antiguas de la región, ha coexistido con episodios de violencia que han mermado la participación política, las libertades civiles y la construcción del Estado (Pécaut, 2003; Posada, 2006).

Como ocurre en contextos de violencia generalizada, la participación democrática ha disminuido (House, 2014). En los territorios dominados por la guerrilla la afluencia a las urnas ha sido más baja (García, 2007; Hoyos, 2009). Los hostigamientos de los grupos armados a la población y el asesinato de candidatos han minado los espacios de participación (Bejarano y Pizarro, 2002; Sánchez y Chacón, 2005). En algunos territorios se instauraron poderes alternativos y, en otros, existió una cooptación del Estado por parte de estructuras armadas (Romero, 2007; Ávila y Velasco, 2013). En estos contextos, el funcionamiento de las instituciones se entorpeció, el Estado perdió el control y se delinearon zonas menos democráticas (Camacho *et al.*, 2009; Eaton y Prieto, 2017).

Pese a las consecuencias que la violencia armada ha tenido en las instituciones y en el desarrollo político y electoral en las regiones, la preferencia de los legisladores por la democracia ha sido inalterable. En la figura 8.1 se observa que durante el periodo 1998-2018 los parlamentarios declararon que prefieren un régimen democrático, en lugar de uno autoritario, y aquellos que mencionaron una inclinación por un gobierno autoritario representan menos del 1% de la muestra.

Figura 8.1 Preferencias declaradas por la democracia*



Fuente: Elaboración propia con base en el PELA - Colombia 1998-2018.

* La pregunta de preferencia declarada de la encuesta es ¿con cuál de las dos siguientes frases está usted más de acuerdo?

Democrático: La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno.

Autoritario: En contextos de crisis económica e inestabilidad política, un gobierno autoritario puede ser preferible

Nota: Para los periodos legislativos 2010-2014 y 2014-2018 se presentaron observaciones que no contestaron la pregunta, lo que explica que el total no sume 100% en estos dos años.

Estos resultados confirman que el compromiso por mantener un régimen democrático es una posición invariable no solo de los ciudadanos, sino también de las élites políticas. Desde el 2004, los datos de LAPOP señalan que el apoyo a la democracia se ha mantenido relativamente estable, mostrando una tendencia cercana o superior al 70% (LAPOP, 2018).⁴ La preferencia por la democracia, como se mencionó en la segunda sección, evoca un concepto ontológico del régimen, que en general no depende de las evaluaciones que se hagan de la economía o del funcionamiento

⁴ El apoyo a la democracia ha tenido tres momentos críticos; en el primero, en el 2013, el respaldo registró un valor de 65,7%; en el 2016 se reportó el punto más bajo (58,7%); y en el 2018 se ubicó en 64,7%.

del Estado; por tal razón, una gran parte de los ciudadanos y los políticos afirma que la democracia es mejor que cualquier otra forma de gobierno.

La estabilidad o la inestabilidad democrática: un cambio en la percepción

La segunda pregunta que elabora el PELA relacionada con la democracia interpreta la percepción de los representantes sobre la estabilidad del sistema político. Como se observa en la figura 8.2, ha existido una variabilidad en la valoración de los legisladores. En el primer semestre de la presidencia de Andrés Pastrana (1998-2002) se destaca un elevado porcentaje (80%) de estabilidad, que contrasta con la impresión de los congresistas, entre 2002-2006 y 2006 -2010, cuando este valor descendió a menos del 40%.

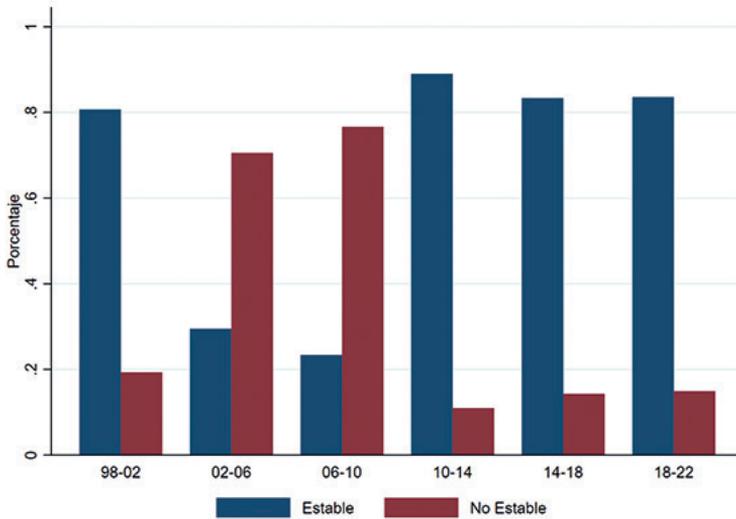
La intensidad de las confrontaciones y el terror que suscitaron los grupos armados a la población puede ser uno de los factores que explica la valoración de los representantes en el 2002. Entre el 2000 y el 2001 la cantidad de masacres, de atentados terroristas y de población en situación de desplazamiento⁵ se incrementó (Echandía, 2012). La disputa territorial entre las FARC-EP y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)⁶ elevó las acciones contra los civiles como una estrategia para mantener la influencia en las zonas. En esta coyuntura, los secuestros masivos, conocidos como *pescas milagrosas*, también aumentaron. El dominio territorial que iban consolidando los paramilitares impidió que la guerrilla pudiera seguir ejecutando secuestros selectivos, por lo que este tipo de detención se hizo más recurrente.⁷

⁵ La presión de los grupos armados obligó a muchas comunidades a desplazarse de sus zonas de origen hacia áreas selváticas o a los centros urbanos; entre el 2000 y el 2002, 2.103.304 fueron desplazadas. En el 2002 las cifras de personas en situación de desplazamiento alcanzan el pico más alto: 764.523; y para el 2001 este número ascendió a 660.500 (datos tomados del panel municipal de conflicto y violencia del CEDE, 2019).

⁶ Los paramilitares se originaron, desde mediados de los años noventa, como una agrupación armada en contra de las guerrillas. En 1997 los grupos paramilitares se unieron en las Autodefensas Unidas de Colombia, que reagruparon a las autodefensas de Córdoba, Urabá, el Magdalena Medio y los Llanos Orientales.

⁷ En un análisis muy riguroso, Echandía describe la transformación de las tácticas de las guerrillas. En el texto señala que “el ascenso de los secuestros indiscriminados en

Figura 8.2 Percepción de estabilidad de la democracia*



Fuente: Elaboración propia con base el PELA - Colombia 1998-2018.

* Hablemos de la estabilidad de la democracia en Colombia; en su opinión, la democracia en Colombia es hoy: (opciones de respuesta).

Nota: A causa de la variación en las categorías de opción de respuesta en cuanto a la estabilidad: muy, bastante, poco y nada estable de 1998-2010 a muy, algo, poco y nada estable, se realizó una clasificación binaria entre estable y no estable agrupando las dos categorías superiores e inferiores para efectos de comparabilidad de todo el periodo comprendido por las encuestas estudiadas.

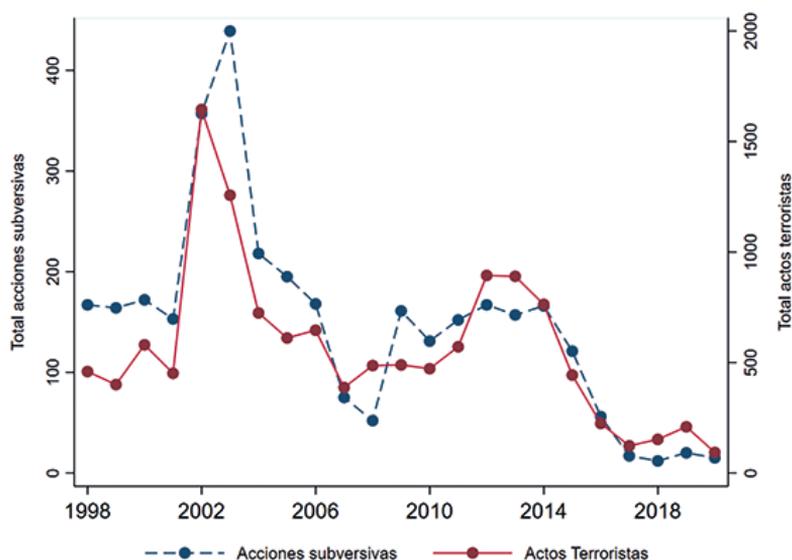
En el segundo gobierno de Álvaro Uribe (2006-2010) y tras la firma del acuerdo de Santa Fe de Ralito, en el 2003, que permitió la desmovilización de las autodefensas, los ataques a la población fueron descendiendo. Si bien luego del desarme de los paramilitares emergieron nuevos actores y las lógicas de la violencia se alteraron, la política de “seguridad democrática” imprimió una sensación de seguridad a la sociedad.⁸

retenes ilegales, llamados ‘pescas milagrosas’, se registra cuando comienzan a descender los que realizan, en forma selectiva, las guerrillas. De aquí que sea razonable interpretar esta conducta como resultado del intento, por parte de los alzados en armas, de compensar, con secuestros masivos e indiscriminados, la disminución en los secuestros selectivos” (2012, p. 134).

⁸ Luego del proceso de desmovilización de las autodefensas, en algunas regiones se estructuraron otros grupos armados fuertemente vinculados al tráfico de drogas y a otras actividades delictivas, denominadas bandas criminales (bacrim).

No obstante, en el mismo período emergió otro factor que pudo afectar la evaluación de la democracia: la reelección de Uribe en el 2006 originó un duro debate sobre el desbalance de poder y el riesgo que esto tendría para el sistema político. El cambio constitucional de 2005, que aprobó el segundo mandato presidencial, modificó el balance entre las tres ramas del poder; y el ejecutivo consiguió una mayor influencia en el nombramiento de los jueces. Como lo mencionaron Botero *et al.* (2010), la democracia colombiana en esta coyuntura tuvo que sortear dos grandes amenazas. Una de ellas externa al sistema, relacionada con los actores armados, y otra proveniente de factores internos asociados a los desequilibrios institucionales y la emergencia de un liderazgo caudillista.

Figura 8.3 Acciones subversivas y actos terroristas, 1998-2020*



Fuente: Elaboración propia con base en cifras del Observatorio del Programa Presidencial de derechos humanos y derecho internacional humanitario, Vicepresidencia de la República en Peco y Peral (2005) para el periodo 1998-2001, y reportes del Ministerio de Defensa (2008; 2015; 2020) para el periodo 2002-2020.

* Las cifras del 2020 comprenden el periodo enero-mayo.

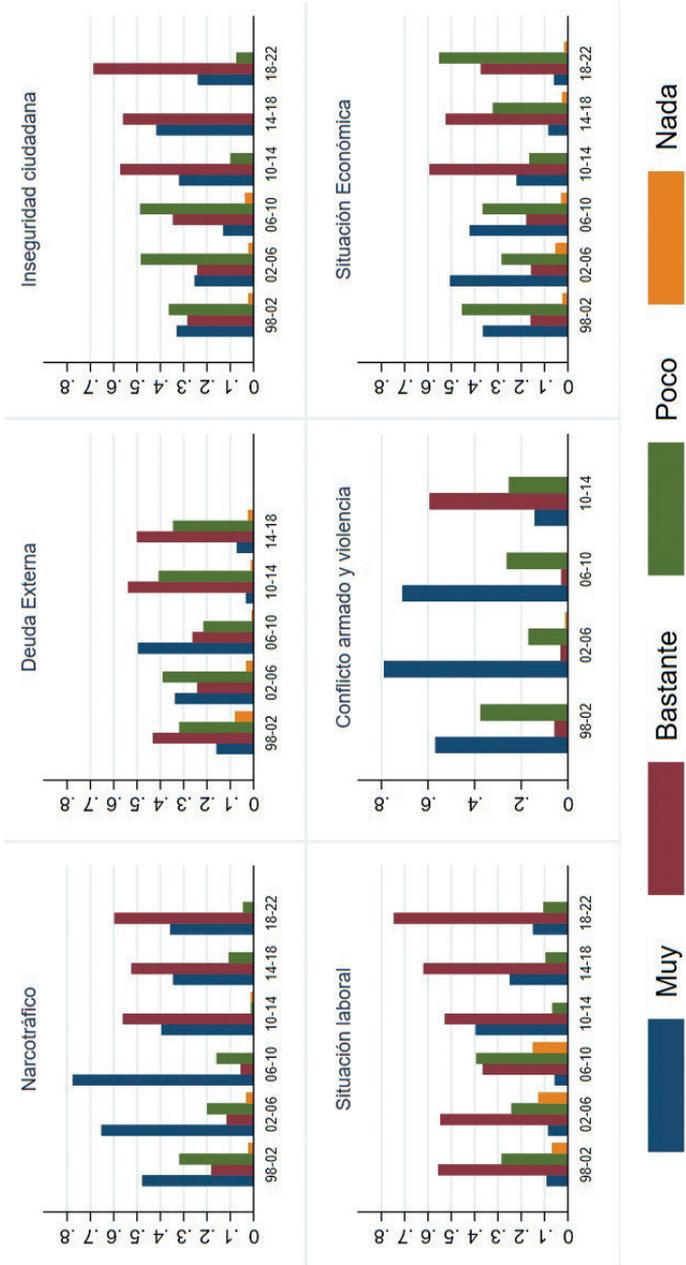
Nota: De acuerdo con el Ministerio de Defensa, los casos registrados como terrorismo fueron definidos de acuerdo con la Ley 599 de 2000 de la siguiente manera: “Todas las acciones que provoquen o mantengan un estado de zozobra o terror en la población o un sector de ella [...]. Con respecto a las acciones subversivas, incluyen los ataques a instalaciones policiales, aeronaves, urbanos, contactos armados, emboscadas, hostigamientos, incursión y ataque a poblaciones”.

A partir del 2010 se evidencia un aumento en la percepción positiva de la estabilidad democrática, obteniendo un porcentaje superior al 80%, que se mantiene hasta el último periodo legislativo encuestado (2018-2022). Por un lado, el fallo que impidió un tercer periodo presidencial posiblemente envió un mensaje de fortaleza institucional. La prohibición de la reelección, más allá de dos periodos consecutivos, demostró que el sistema de pesos y contrapesos aún prevalecía, en un momento crucial, cuando en los países de la región Andina perduraban los caudillismos. Por otra parte, en el 2010, como se detalla en la figura 8.3, las acciones subversivas y los actos terroristas fueron bajos (Ministerio de Defensa, 2020).

En el 2014 se conocían las negociaciones de paz que adelantaba el Gobierno de Juan Manuel Santos con las FARC-EP. El cese al fuego y la incapacidad del Estado y de la guerrilla para alcanzar sus objetivos por la vía armada auguraban una salida negociada del conflicto; y esto eventualmente imprimió una percepción de estabilidad democrática entre los legisladores. A pesar del leve aumento en los combates durante 2011-2012, para el 2013 la intensidad de las hostilidades ya había disminuido. Además, la derrota militar se desdibujó como una opción factible para las Fuerzas Armadas y las FARC-EP. El fin de la confrontación representaba el mejor escenario para cada una de las partes involucradas en la negociación. El Estado impedía la degradación de los combates y la generación de nuevas víctimas. Y para el grupo guerrillero era la oportunidad de alcanzar su proyecto político por la vía democrática (Echandía y Cabrera, 2019).

Para el 2018, cuando Iván Duque llega a la presidencia, ya se había alcanzado la desescalada del conflicto y la puesta en marcha del Acuerdo Paz era un hecho. Durante 2015-2019 las acciones subversivas disminuyeron, ostensiblemente, al pasar de 34 a 15 registros. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Defensa (2020) las acciones subversivas registraron un decrecimiento del 69% entre el 2016 y el 2017, y un 30% entre el 2017 y el 2018. Aunque ese año el país atravesó una alta polarización política y el triunfo del Centro Democrático, la participación en el Congreso por primera vez de las FARC-EP simbolizó el tránsito hacia una democracia más estable.

Figura 8.4 Percepción de conflicto y violencia como amenazas a la democracia



Fuente: Elaboración propia con base el PELA 1998-2018.

Nota: Se creó una escala estandarizada para todo el periodo en las cuatro categorías que se muestran en la figura siendo 1 nada y 4 muy importante. Para los años 2010-2014 que empleó la escala 1 a 10, los extremos representaron las categorías más altas y bajas respectivamente (1 = nada) (10 = muy), mientras que poco y bastante fueron distribuidos (2,3,4,5 = poco) y (6,7,8,9 = bastante). Algunas categorías no fueron incluidas en las oleadas 2014-2018 y 2018-2022.

En ese sentido, desde el 2008 el conflicto dejó de ser el principal problema para los ciudadanos, dando paso a la economía, la inseguridad y la corrupción (García *et al.*, 2015). La encuesta del PELA refleja que los representantes también se despreocuparon; como se detalla en la figura 8.4, la importancia del conflicto como una de las amenazas a la democracia⁹ descendió. A partir de 2010 la categoría muy importante se acortó, mientras que bastante y poco ganaron espacio en las respuestas de los parlamentarios. Como se observa en la figura durante 1998, el 2002 y el 2006, alrededor del 60% de los legisladores ubicaron los combates armados en el rango muy importante, y para el 2010 esta cifra se redujo por debajo del 20%. En contraste, las categorías relacionadas con el entorno económico, como la situación laboral y la inseguridad ciudadana, han venido aumentando la proporción de respuestas en la categoría “bastante importante”.

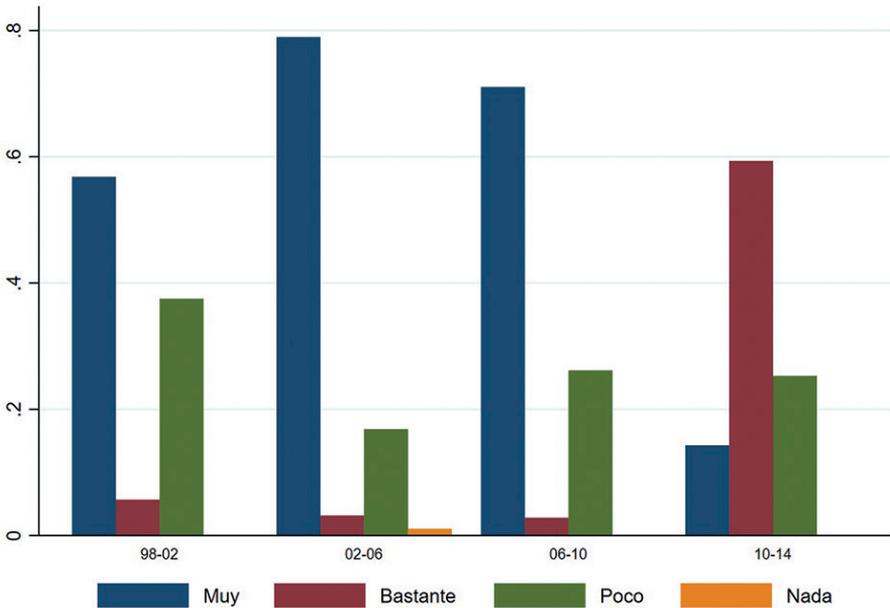
Paradójicamente, la firma del Acuerdo de Paz en el 2016 no significó el cese total de las confrontaciones armadas. La formación de grupos disidentes de las FARC-EP y de los paramilitares, más la aparición de otras organizaciones delictivas, no representó un declive inmediato en el número de víctimas. El informe sobre Colombia de LAPOP (2018) muestra que en el 2016 y el 2018 aproximadamente 1 de cada 10 entrevistados reportó que había sido víctima del conflicto armado en el último año (Gaviria *et al.*, 2019). La desmovilización de las autodefensas y el cese de hostilidades con las FARC-EP transformaron la lógica de confrontación y complejizaron el conflicto. Con la inserción de bandas delincuenciales y su alianza con los antiguos grupos armados para controlar el tráfico de drogas ilícitas se implementaron nuevas dinámicas en la confrontación bélica. En este nuevo contexto, el número de víctimas a manos de la guerrilla descendió, pero otros grupos –paramilitares, exparamilitares y divisiones de las guerrillas– continúan victimizando a la población (Garzón, 2020).

⁹ La pregunta a la que se refieren estos datos es “a continuación, le voy a nombrar una serie de problemas locales comunes a muchos países. ¿Podría indicarme para cada uno de ellos qué grado de importancia tienen hoy en Colombia siguiendo esta escala de 1 a 10, donde el 1 significa ‘no es una cuestión importante’ y el 10 ‘es una cuestión muy importante’? En las encuestas del 2014 y el 2018 el conflicto no se incluyó dentro de las opciones.

Satisfacción con la democracia

Desde el año 2010 se incluyó una pregunta que captura la satisfacción con la democracia; como se muestra en la figura 8.5, las respuestas de los parlamentarios evidencian que en general ha existido una respuesta en mayor medida concentrada en la categoría satisfecho. La categoría muy satisfecho, por su parte, ha mostrado una disminución, mientras que muy insatisfecho ha aumentado. La categoría insatisfecho presenta variabilidad con una gran participación para el periodo 2014-2018.

Figura 8.5 Satisfacción con la democracia*



Fuente: Elaboración propia con base en el PELA -Colombia 1998-2018.

* ¿Diría usted que está muy satisfecho, satisfecho, insatisfecho o muy insatisfecho con el funcionamiento de la democracia hoy en Colombia?

Los datos de satisfacción son congruentes con la percepción de estabilidad de la democracia. En las tres legislaturas recogidas por la encuesta, la satisfacción con la democracia y la percepción de estabilidad son superiores a los niveles de insatisfecho y no estable. En el 2010 se registra una tendencia atípica; el porcentaje de muy satisfecho y satisfe-

cho representa más del 70%. En el mismo año, el 54% de los ciudadanos mencionó que está muy satisfecho o satisfecho con el desempeño de la democracia. Según García *et al.* (2015), los resultados de la política de seguridad democrática generaron una percepción más positiva frente a la satisfacción con la democracia.

Luego del 2011, la evaluación de los ciudadanos regresa a los patrones normales de descontento. En el 2014 y el 2018 más del 50% de las personas encuestadas manifestaron que están insatisfechas con el desempeño de la democracia (LAPOP, 2018). En consonancia, en el 2014, cerca del 40% de los representantes de la Cámara expresaron que están insatisfechos. Sin embargo, en el 2018 esta cifra fue menor al 20%. Para este periodo legislativo, se conformó una sólida coalición de gobierno, y se puede predecir que su satisfacción con el sistema político cambió al no estar en la oposición.¹⁰

Confianza en las instituciones y satisfacción con la democracia

Como una estrategia de aproximación a la satisfacción con la democracia, y con el objetivo de aportar un indicador para medir la evaluación de los representantes sobre el funcionamiento del sistema político, se construyó un índice de confianza en las instituciones que considera las percepciones de confianza sobre la rama judicial, las fuerzas armadas, el parlamento, el presidente, los funcionarios públicos y la policía, por medio del método de análisis de componentes principales (ACP).¹¹ La tabla 8.2 resume las estadísticas descriptivas de las variables del índice. Es posible ver que el cálculo del ACP arrojó mayores pesos para las variables con mayor desviación estándar: las fuerzas armadas, el presidente y la policía, que es consistente con el objetivo del método de maximizar la varianza de la muestra.

¹⁰ En la Legislatura 2014-2018 el Centro Democrático obtuvo el 11,5% en la Cámara, y para 2018-2022 ganó el 18% de las curules.

¹¹ El ACP es un método estadístico que procura sintetizar y dar una estructura a una matriz de datos por medio de una combinación lineal de las variables de interés (Lozares y López, 1991).

Tabla 8.2 Estadísticas descriptivas de los componentes del índice de confianza

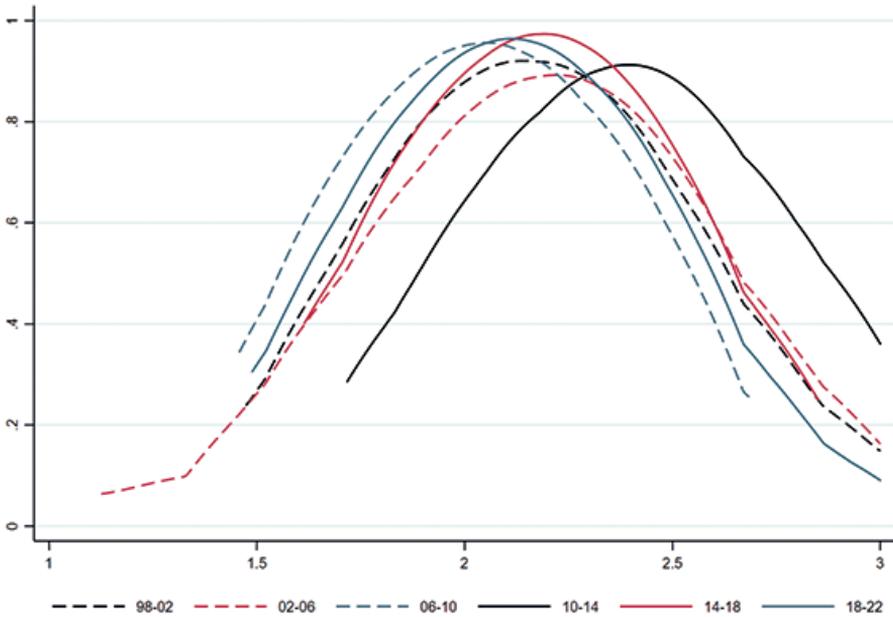
Variable	Media	D. E.	Peso
Rama judicial	2.373	0,681	0,13
Fuerzas Armadas	2.444	0,736	0,19
Parlamento	2.411	0,699	0,16
Presidente	2.451	0.765	0,19
Funcionarios públicos	2.508	0,568	0,15
Policía	2.509	0,629	0,18
Índice de confianza	2.196	0,300	

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la encuesta del PELA - Colombia 1998-2018.

Nota: Debido a la variación en las categorías de opción de respuesta en los diferentes periodos encuestados, se crearon tres categorías para unificar todo el periodo de estudio: 1) ninguna confianza, 2) poca / alguna confianza, 3) mucha confianza.

En el gráfico 8.6 se observa que, aunque para la mayoría de los periodos la media se ha centrado en el valor de 2 (siendo medida de 1 a 3), los puntajes mínimos del índice han venido mejorando al pasar del mínimo de 1,1 en 2002-2006 a 1,7 en 2010-2014. Además, para el periodo legislativo 2010-2014 se evidencia una mejora en los puntajes mayores del índice de confianza en las instituciones (media 2,4) que sería concordante con las cifras de estabilidad y las que responden a la pregunta por la satisfacción con la democracia (ver figura 8.5). La última ola de la encuesta (2018-2022), por su parte, evidencia una media similar a la de los años previos al 2010, y los puntajes toman un valor mínimo de 1,4 y una media de 2,12. La desviación estándar del índice se encuentra en promedio en 0,3 para todos los periodos analizados.

Figura 8.6 Distribución del índice de confianza en las instituciones*



Fuente: Elaboración propia con base en información de la encuesta del PELA 1998-2018.

* En relación con las siguientes instituciones, me gustaría saber ¿qué grado de confianza le merece su actuación en la vida pública colombiana?

El consentimiento al desempeño de la democracia es elástico, depende de las condiciones del contexto y de las circunstancias específicas que está viviendo un ciudadano. Varios trabajos han resaltado que la satisfacción por la democracia está correlacionada con la confianza que expresan los ciudadanos por las instituciones políticas (Fernández y Kuenzi, 2009; García, *et al.*, 2015; Welling, *et al.*, 2020).¹² Como se muestra en la tabla 8.3, para el caso puntual de las variables de satisfacción con la democracia de la encuesta y el índice de confianza en las instituciones existe una correlación positiva y significativa estadísticamente entre ambas variables.

¹² En el estudio de García *et al.* (2015) se menciona “la evolución de la satisfacción con la democracia, descrita en la sección anterior, coincide con aquella de la confianza en las instituciones centrales del país. [...] El patrón es prácticamente idéntico independientemente de que se trate de la confianza en el gobierno, en el Congreso o en el sistema de justicia. En las tres ramas del poder, la confianza cayó abruptamente entre 2012 y 2013, y se mantuvo en esos pobres niveles en 2014”.

Tabla 8.3 Correlación entre satisfacción y confianza

Variable dependiente: Satisfacción con la democracia	
Confianza en la democracia	0,878***
	(0,132)
Constante	0,857***
	(0,299)
Observaciones	230
R ²	0,162

Fuente: Elaboración propia con base en las preguntas del PELA.

Nota: Errores estándar entre paréntesis *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$.

En ese sentido, estos resultados nos muestran que podrían existir algunos elementos explicativos de la confianza en términos de la satisfacción con la democracia; sin embargo, no se concluye que exista causalidad entre las variables aquí analizadas.

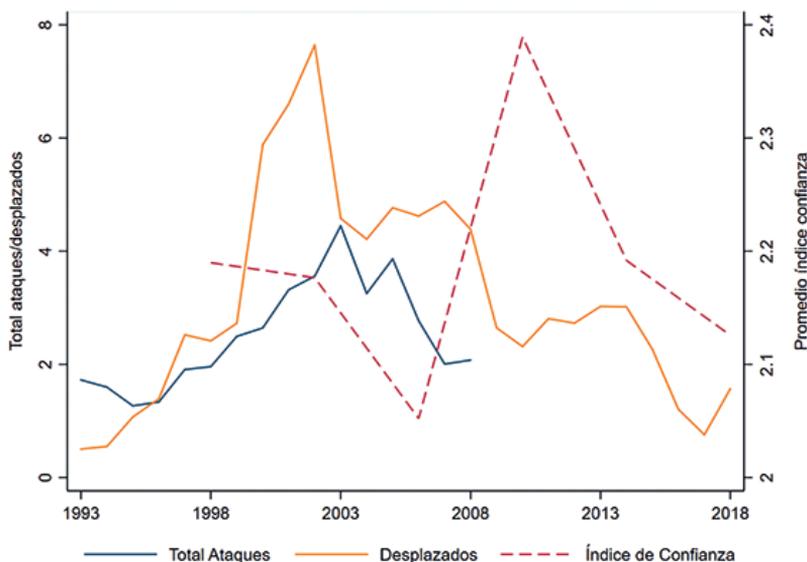
Conflicto armado y actitudes frente a la democracia, ¿alguna relación?

Como se mencionó, la literatura ha mostrado que ser víctima de un delito tiene una relación más fuerte (negativa) con la satisfacción con la democracia (variable dependiente) en países con un mayor nivel de victimización. Asimismo, sentirse más seguro generalmente tiene un mayor impacto (mayor pendiente) en la percepción del desempeño de la democracia en países con tasas de criminalidad más altas (Fernández y Kuensi, 2009). Con el fin de explorar estas ideas, se testeó para el contexto colombiano la relación entre las estadísticas de ataques a la población civil y el desplazamiento forzado en Colombia,¹³ y el índice de confianza

¹³ Se seleccionaron las variables de ataques a la población civil y desplazamiento forzado al ser identificadas como dos factores por sus implicaciones humanitarias. Además, de acuerdo con Peco y Peral (2005), se identifican como causas del mantenimiento del conflicto con una erosión directa a la democracia colombiana.

en las instituciones de acuerdo con las respuestas de los parlamentarios. Como se muestra en la figura 8.7, con el aumento de los ataques y de la población en desplazamiento forzado en el periodo 1998-2003, el índice de confianza mostró un descenso en su valor promedio. A la vez que la población en situación de desplazamiento decreció en el periodo 2008-2018, el índice de confianza mostró una tendencia creciente.

Figura 8.7 Trayectorias de la confianza y total de ataques y desplazados



Fuente: Elaboración propia con base en el panel de conflicto y violencia del CEDE y la confianza en las instituciones de la encuesta del PELA.

Nota: El total de los ataques se presenta en miles, el total de desplazados en cientos de miles, y el índice de confianza está medido en la escala de 1 a 3 de menor a mayor valor

Evidencia empírica

Para analizar en detalle la correlación descrita previamente, se estimó un modelo por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para capturar las potenciales relaciones entre la confianza en las instituciones manifestada por los parlamentarios y dos manifestaciones del conflicto armado en el país. La siguiente ecuación resume la estimación realizada:

$$\text{confianza}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{violencia}_{it} + \delta d + u_i$$

El índice de confianza en las instituciones es declarado por el parlamentario i en el periodo legislativo t . *Violencia* captura la suma de los ataques a la población civil o los números de desplazados de los cuatro últimos años previos a la entrevista realizada, como se resume en la tabla 8.4. Finalmente δd representa variables *dummy* de departamento o partido para capturar las particularidades idiosincráticas del encuestado.

Tabla 8.4 Resumen de los periodos de violencia agregados

Periodo legislativo	Años de ataques
1998-2002	1994-1997
2002-2006	1998-2001
2006-2010	2002-2005
2010-2014	2006-2009
2014-2018	2010-2013
2018-2022	2014-2017

Fuente: Elaboración propia.

Como se muestra en la tabla 8.5, en las diferentes especificaciones los resultados muestran una relación negativa entre el índice de confianza en las instituciones y las diferentes medidas de violencia. Para el modelo 1, el resultado indica una relación negativa y significativa entre ataques y confianza; en específico, al incrementar en 1.000 los ataques a la población a nivel nacional se espera que en promedio el índice de confianza en las instituciones disminuya en 0,016 unidades en el índice de confianza.¹⁴

El segundo modelo indica que a pesar del aumento en el total de ataques del país exceptuando el departamento al que pertenece el representante tiene un efecto negativo en el índice de confianza. Al incrementar el número de ataques en el departamento que representa el parlamentario se genera un efecto positivo en la confianza en las instituciones. Este resultado puede interpretarse como una reacción de respaldo por su autoidentificación como parte de la estructura del Estado, al ser parte de sus cuerpos representativos; pues no hay que perder de vista que el conflicto ha estado asociado a una lucha por el poder local (Camacho *et al.*,

¹⁴ Como se mencionó anteriormente, el índice de confianza es medido de 1 a 3.

2009; Ávila y Velasco, 2013). Otros estudios de élites como Nolte (2004) indican resultados en esta misma línea al analizar élites en Ijebu-Remo en Nigeria. Según el autor, las élites jóvenes elegidas en este país encuentran en la cohesión y el respaldo en las instituciones un mecanismo de refuerzo positivo al Estado. Por su parte, los modelos 3 y 4 evidencian una relación negativa entre desplazamiento y confianza en las instituciones, tanto a nivel nacional como departamental.

Tabla 8.5 Resultados de las estimaciones

Variable dependiente: Índice de confianza en las instituciones				
	(1)	(2)	(3)	(4)
Total ataques nacional	-0,0157**			
	(0,00644)			
Total ataques en el resto del país		-0,0251***		
		(0,00721)		
Total ataques por departamento		0,378***		
		(0,144)		
Total de desplazados nacional			-0,000956	
			(0,00284)	
Total de desplazados en el resto del país				-0,000471
				(0,00305)
Total de desplazados por departamento				-0,0159
				(0,0344)
Efecto fijo por departamento	Sí	Sí	Sí	Sí
Efecto fijo partido	Sí	Sí	Sí	Sí
Observaciones	233	233	379	379
R-cuadrado	0,250	0,278	0,193	0,194

Fuente: Elaboración propia.

Errores estándar entre paréntesis *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$.

Conclusiones

La democracia en Colombia se deslizó por distintos periodos de violencia. Por más de medio siglo el desarrollo democrático no pudo soslayar la aguda confrontación armada, que con distintos matices vivieron los habitantes

de cada una de las regiones. Varios trabajos, especialmente para África y Centroamérica, han demostrado que la percepción de seguridad y la experiencia de victimización repercuten en la satisfacción con la democracia. El objetivo de este capítulo fue analizar si el incremento en los sucesos de conflicto a nivel nacional y departamental impacta la percepción de los legisladores sobre los imperativos democráticos. Para ello, se exploraron diferentes medidas que provee la encuesta del PELA sobre la democracia, entre 1998-2018, en términos de preferencia y estabilidad, y especialmente se buscó realizar una medición de la satisfacción declarada por los parlamentarios a través de las preguntas de confianza en las instituciones.

La preferencia por la democracia, en línea con lo planteado por otros autores, ha sido inalterable en todos los periodos de estudio. El apoyo a la democracia es menos elástico en relación con la coyuntura económica y social, y el bienestar individual. Durante los seis periodos de estudio casi la totalidad de los representantes a la Cámara manifestaron que prefieren un régimen democrático en lugar de otra forma de gobierno.

Por su parte, la evaluación de estabilidad y satisfacción con la democracia presentó un comportamiento variable. En el 2002 y el 2006 la percepción de estabilidad arrojó los niveles más bajos. El recrudecimiento de los combates y la complejidad de la confrontación impusieron nuevas lógicas de control y el uso de estrategias terroristas; la cifra más alta de población en desplazamiento forzado y de combates coincide entre el 2000 y el 2001. En el 2006, tras la política de “seguridad democrática” se experimenta una disminución en los combates, pero la evaluación de la estabilidad no remonta.

En el 2010 se evidencia un aumento atípico en la percepción de estabilidad, pero también en la satisfacción con la democracia. A partir de ese año, la importancia del conflicto, como una de las amenazas a la democracia, disminuyó. Luego, la evaluación sobre la estabilidad regresa al 80%. Y la insatisfacción con la democracia retoma sus patrones normales de descontento (50%). Para el 2013 las confrontaciones armadas y la intensidad de las hostilidades a los civiles comenzaron su descenso, aunque no han sido completamente disueltas.

El índice de confianza, como una medida alternativa para medir la satisfacción con la democracia, reveló un comportamiento similar a

las respuestas sobre estabilidad. El índice mostró un descenso en su valor promedio cuando el número de ataques y la población desplazada aumentaron, en el periodo 1998-2003. A su vez, el índice de confianza tuvo una tendencia creciente cuando los sucesos violentos disminuyeron, entre el 2008 y el 2018.

La relación estadística entre los ataques a la población civil, el desplazamiento forzado en Colombia y el índice de confianza en las instituciones, de acuerdo con las respuestas de los parlamentarios, corroboran una relación negativa. Los periodos de pico de violencia que tuvieron lugar entre el 2002 y el 2006 mostraron un detrimento en los indicadores de apoyo a la democracia; la mejora en las condiciones de seguridad de las últimas dos legislaturas ha venido acompañada por un crecimiento en los indicadores de satisfacción y confianza en la democracia.

Además de los factores analizados en el capítulo, futuras investigaciones podrían explorar las percepciones y actitudes de los parlamentarios en las circunscripciones especiales, en las cuales la experiencia del conflicto puede brindar una perspectiva diferente a nivel departamental. Además, resulta relevante explorar a fondo el impacto de los cambios en los problemas que los legisladores consideran amenazan la democracia; dada la disminución en la intensidad del conflicto sería oportuno revisar el comportamiento de las variables económicas. Finalmente, es importante analizar qué factores generan un cambio en la evaluación del conflicto a nivel nacional, o departamental, por medio de variables como la antigüedad en un cargo representativo, pues las élites más jóvenes tienden a demostrar una mayor confianza en las instituciones; las propias percepciones del territorio al cual representan y el nivel de autoidentificación de los parlamentarios como parte del Estado pueden afectar la percepción.

Referencias

Anderson, C., y Guillory, C. (1997). Political institutions and satisfaction with democracy: A cross-national analysis of consensus and majoritarian systems. *The American Political Science Review*, 91(1), 66-81.

Anderson, C., y Tverdova, Y. (2003). Corruption, political allegiances, and attitudes toward government in contemporary democracies. *American Journal of Political Science*, 47(1), 91-109.

Ávila, A. y Velasco J. (2013). *Democracias en venta: partidos, corrupción electoral, violencia y crimen en Colombia (2007-2011)*. Bogotá: Corporación Nuevo Arco Iris.

Bateson, R. (2012). Crime victimization and political participation. *The American Political Science Review*, 106(3), 570-587.

Behar, C. A., y Beltrán, I. J. G. (2020). Violencia del conflicto armado y abstención electoral en el suroccidente de Colombia entre los años 2002 y 2015. *Eirene Estudios de Paz y Conflictos*, 3(5).

Bejarano, A., y Pizarro, E. (2002). *From "restricted" to "besieged": The changing nature of the limits to democracy in Colombia*. Working Paper 296, Notre Dame: The Hellen Kellogg Institute for International Studies, Universidad de Notre Dame.

Blanco, L., y Ruiz, I. (2013). The impact of crime and insecurity on trust in democracy and institutions. *American Economic Review*, 103(3), 284-288.

Barómetro de las Américas (s. f.). *Apoyo a la democracia en Colombia, 2010-2018*. <https://goo.su/SdJbl>.

Barómetro de las Américas (s. f.). *Satisfacción con el desempeño de la democracia en Colombia, 2010-2018*. <https://goo.su/nVb7>.

Barro, R. (1999). Determinants of democracy. *Journal of Political Economy*, 107(6), 158- 183.

Botero, F., Hoskin, G., y Pachón, M. (2010). Sobre forma y sustancia: Una evaluación de la democracia electoral en Colombia. *Revista de Ciencia Política*, 30(1), 41-64.

Bottia, M. (2003). *La presencia y expansión municipal de las FARC: es avaricia y contagio, más que ausencia estatal*. Bogotá: Universidad de los Andes - CEDE.

Calderón, J. (2016). Etapas del conflicto armado en Colombia: hacia el posconflicto. Latinoamérica. *Revista de Estudios Latinoamericanos*, 62, 227-257.

Camacho, A., Duncan, G., Steiner, C., Vargas, R., y Wills, M. E. (2009). *A la sombra de la guerra: ilegalidad y nuevos órdenes regionales en Colombia*. Bogotá: Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Sociales, CESO, Ediciones Uniandes.

Centro de Estudios de Desarrollo Económico (2018). *Panel de conflicto y violencia: Diccionario de variables*. Bogotá: CEDE.

Colagrossi, M., Rossignoli, D., y Maggioni M. (2020). Does democracy cause growth? A meta-analysis (of 2000 regressions). *European Journal of Political Economy*, 61.

Corbacho, A., Philipp, J., y Ruiz, M. (2015). Crime and erosion of trust: evidence for Latin America. *World Development*, 70, 400-415.

Cruz, J. (2003). Violencia y democratización en Centroamérica: el impacto del crimen en la legitimidad de los regímenes de posguerra. *América Latina Hoy*, 35, 19-59.

Eaton, K., y Prieto, J. (2017). Subnational authoritarianism in Colombia: Divergent paths in Cesar and Magdalena. En T. Hilgers y L. Macdonald (eds.), *Violence in Latin America and the caribbean subnational structures, institutions, and clientelistic networks*. Cambridge: Cambridge University Press.

Echandía, C. (2012). Cambios en la conducta de las FARC en medio de la ofensiva militar en su contra. Elementos para un balance. En E. Bechara (ed.), *¿Prolongación sin resolución? Perspectivas sobre la guerra y la paz en Colombia* (pp. 45-74). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Echandía, C., y Cabrera, I. (2019). De las armas a las urnas: la participación del partido Farc en las elecciones legislativas de 2018. En P. Montilla y C. Jiménez (eds.), *Elecciones 2018 en Colombia: La competencia política en un escenario de paz* (pp. 425-475). Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Evans, G., y Whitefield, S. (1995). The politics and economics of democratic commitment: Support for democracy in transition societies. *British Journal of Political Science*, 25(4), 485-514.

Fernández, K., y Kuenzi, M. (2009). Crime and support for democracy in Africa and Latin America. *Political Studies*, 58(3), 450-471.

Gallego, M. M. (2020). Estado y violencia. Procesos interferidos, hegemónicos y conflictivos en la Colombia reciente. *Revista Cambios y Permanencias*, 11(1), 490-516.

Garzón, J. (2020). 13 gráficos para entender la violencia organizada en el post-Acuerdo de Paz. *Fundación Ideas para la Paz*.

Disponible en: <https://www.ideaspaz.org/publications/posts/1928>.

García, M. (2007). Sobre balas y votos: violencia política y participación electoral en Colombia, 1990-1994. En D. Hoyos (ed.), *Entre la persistencia y el*

cambio: reconfiguración del escenario partidista y electoral en Colombia (pp. 84-117). Bogotá: Universidad del Rosario.

García, M., Rodríguez Raga, J., Seligson, M., y Zechmeister, E. (2015). *Cultura política de la democracia en Colombia, 2014: Dilemas de la democracia y confianza institucional en el marco del proceso de paz*. Bogotá: Universidad de los Andes.

Gaviria, A., Ávila, C., y García, M. (2019). *Barómetro de las Américas Colombia 2018: Paz, conflicto y reconciliación*. Bogotá: Universidad de los Andes.

Habibov, F., y Auchynnikava, A. (2019). The effects of corruption on satisfaction with local and national governments. Does corruption “grease the wheels”? *Europe-Asia Studies*, 71(5), 736-752.

Freedom House (2014). *Freedom in the World 2014: The annual survey of political rights and civil liberties*. Rowman & Littlefield. New York: Basic Books.

Hoyos, D. (2009). Dinámicas político-electorales en zonas de influencia paramilitar: análisis de la competencia y la participación electoral. *Análisis Político*, 22(65), 13-32.

Inglehart, R. (2001). Political culture. En P. B. Clarke y J. Foweraker (eds.), *Encyclopedia of democratic thought* (pp. 521-526). London: Routledge.

Inglehart, R., y Welzel, C. (2005). *Modernization, cultural change, and democracy: The human development sequence*. New York: Cambridge University Press.

Jochem, T., Murtazashvili, I. y Murtazashvili, J. (2019). Can the design of electoral institutions improve perceptions of democracy in fragile states? Evidence from Afghanistan. *Journal of Global Security Studies*.

Kriekhaus, J., Son, J., Bellinger, N., y Wells, J. (2013). Economic inequality and democratic support. *The Journal of Politics*, 76(1), 139-151.

Lair, E. (2000). Colombia una Guerra contra los civiles. *Colombia Internacional*, 49-50, 135 -147.

Lagos, M. (2007). What are emergent democratic societies doing to democracy? *International Journal of Public Opinion Research*, 19(1), 122-126.

Lozares, C., y López, P. (1991). El análisis de componentes principales: Aplicación al análisis de datos secundarios. *Papers. Revista de Sociología*, 37, 31-63.

Ministerio de Defensa (2008). *Logros de la política de seguridad democrática PCSD*. Disponible en: <https://pdba.georgetown.edu/Security/citizenssecurity/Colombia/evaluaciones/logros2007.pdf>

Ministerio de Defensa (2015). *Logros de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad - PISDP*. <https://bit.ly/3UnVprb>.

Ministerio de Defensa (2020). *Logros de la política de seguridad y defensa. Vice-ministerio para las políticas y asuntos internacionales - Dirección de Estudios Estratégicos - Grupo de Información Estadísticos*. Mayo 2020. Disponible en: https://www.mindefensa.gov.co/irj/go/km/docs/Mindefensa/Documentos/descargas/estudios_sectoriales/info_estadistica/Logros_Sector_Defensa.pdf

Mishra, S., y Abdullahi, M. (2020). Citizens' satisfaction with government in a highly corrupt public life: role of trust in democracy and civil society participation in Somalia. *Journal of Asian and African Studies*, 55(5), 762-779.

Nadeau, R., Daoust, J., y Arel-Bundock, V. (2020). The market, the state and satisfaction with democracy. *West European Politics*, 43(1), 250-259.

Newton, K., Stolle, D., y Zmerli, S. (2018). Social and political trust. En E. M. Uslaner (ed.), *The Oxford handbook of social and political trust*. New York: Oxford University Press Democracy.

Norris, P. (2011). *Democratic deficit: Critical citizens revisited*. Cambridge: Cambridge University Press.

O'Donnell, G. (1996). Illusions about consolidation. *Journal of Democracy*, 7(2), 34-51.

Nolte, I. (2004). Identity and violence: the politics of youth in Ijebu-Remo, Nigeria. *Journal of Modern African Studies*, 42(1), 61-89.

Pécaut, D. (2003). *Violencia y política. Ensayos sobre el conflicto colombiano*. Medellín: Hombre Nuevo, Universidad del Valle.

Peco, M., y Peral, L. (2005). *El conflicto de Colombia*. Madrid: Instituto de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria, Universidad Carlos III de Madrid.

Pellegat, A., y Memoli, V. (2018) Corruption and satisfaction with democracy: The conditional role of electoral disproportionality and ballot control. *European Political Science Review*, 10(3), 393-416.

Pino, J. (2017). ¿Un matrimonio infeliz? Democracia y violencia política en Colombia: entre la restricción, cooptación y construcción. *Papel Político*, 22(2), 369-393.

Piñeros, M. D. R. V. (2017). Gamonales y alcaldes: Poder institucional y para institucional en la primera Violencia (Colombia, 1930-1934). *Revista de Indias*, 77(269), 305-334.

Pizarro, E. (2006). Las FARC-EP: ¿repliegue estratégico, debilitamiento o punto de inflexión? En F. Gutiérrez Sanín; y M. Wills (eds.), *Nuestra guerra sin nombre: transformaciones del conflicto en Colombia* (pp. 171-207). Bogotá: Norma.

Posada, E. (2006). *Democracia, violencia y paz en Colombia: Otra reflexión para un debate necesario*. Bogotá: Fundación Ideas para la Paz.

Przeworski, A., Álvarez, M., Cheibub, A., y Limongi, F. (2000). *Democracy and development: Political institutions and well-being in the world 1950-1990*. Vol. 3. Cambridge: Cambridge University Press.

Przeworski, A., Álvarez, M., Cheibub, A., y Limongi, F. (1996). What makes democracy endure? *Journal of Democracy*, 7(1), 39-55.

Salinas, E., y Booth, J. (2011). Micro-social and Contextual Sources of Democratic Attitudes in Latin America. *Journal of Politics in Latin America*, 3(1), 29-64.

Sánchez, F., y Chacón, M. (2005). Conflicto, Estado y descentralización: del progreso social a la disputa armada por el control local, 1974-2002. En F. Gutiérrez, M. Wills y G. Sánchez (eds.), *Nuestra guerra sin nombre. Transformaciones del conflicto en Colombia*. Bogotá: Norma.

Schedler, A. (2001). Measuring democratic consolidation. *Studies in Comparative International Development*, 36, 66-92.

Zmerli, S. y Newton, K. (2008). Social trust and attitudes toward democracy. *Public Opinion Quarterly*, 72(4), 706-724.